



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTES	Deyanira del Socorro Muñoz Higuita y Joaquín Emilio Bedoya Muñoz
DEMANDADOS	UGPP, Positiva S.A. y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
RADICADO	05-001-31-05-013-2019-00425
TEMA	Pensión de sobrevivientes
DECISIÓN	Confirma sentencia

El veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **206** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **DEYANIRA DEL SOCORRO MUÑOZ HIGUITA** y **JOAQUÍN EMILIO BEDOYA MUÑOZ** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP-, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.** y la **NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, con radicado **05-001-31-05-013-2019-00425**.

• **HECHOS:**

Los demandantes señalaron como supuestos fácticos de la acción: que los señores **JAIME DANILO BEDOYA FLOREZ** (q.e.p.d.) y **DEYANIRA DEL SOCORRO MUÑOZ HIGUITA** contrajeron nupcias el 14 de septiembre de 1985, quienes convivieron bajo el mismo techo, de manera continua e ininterrumpida, desde tal fecha y hasta la fecha del fallecimiento del Sr. **JAME DANILO**, hecho ocurrido el 6 de septiembre de 1995. De dicha unión procrearon dos hijos **JHON JAIME BEDOYA MUÑOZ** y **JOAQUÍN EMILIO**

BEDOYA MUÑOZ. Que el señor JAIME DANILO disfrutaba de una pensión de invalidez de origen laboral de forma temporal, pero que mediante resolución 7962 del 5 de octubre de 1973 el ISS se la reconoció de manera definitiva. Que este continuó laborando, acreditando un total de 1.270 semanas de cotización. Que mediante resolución 09251 del 16 de septiembre de 1996 se le reconoció por parte del ISS la pensión de sobrevivientes de origen común tanto a la cónyuge como a los hijos supérstites del causante. Que JOAQUÍN EMILIO BEDOYA MUÑOZ cuenta con una discapacidad mental absoluta, por lo que se nombró a su hermano JHON JAIME BEDOYA MUÑOZ como su curador. Que mediante resolución 017464 del 7 de julio de 2011 se le reconoce la pensión a la cónyuge y al hijo inválido en porcentajes iguales. Que el ISS no reconoció la sustitución de la pensión permanente parcial de origen profesional. Que elevó ante la UGPP el reconocimiento de esta última prestación el 10 de marzo de 2017, la cual fue negada por tal entidad mediante resolución RDP 024288 del 8 de junio del mismo año. Que nuevamente elevó solicitud de reconocimiento de tal prestación económica el 4 de septiembre de 2017, la cual fue negada mediante resolución ADP 008238 del 27 de octubre del mismo año. Elevó otra solicitud de reconocimiento pensional el 15 de noviembre de 2017, la cual fue reconocida por la UGPP mediante resolución 014358 del 24 de abril de 2018, con efectos fiscales desde el 15 de noviembre de 2014 a favor de la señora DEYANIRA DEL SOCORRO MUÑOZ HIGUITA, pero que se dejó en suspenso frente a JOAQUÍN EMILIO BEDOYA MUÑOZ. Que a través de la resolución RDP 020549 del 5 de junio de 2018, la UGPP condiciona el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de origen profesional a la aprobación del cálculo actuarial por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y para ello envía copia de la resolución para que la ARL POSITIVA solicite a dicho Ministerio el pago del cálculo actuarial. Que la UGPP a través de Auto ADP 007734 de octubre 29 de 2018, requiere a la señora MUÑOZ HIGUITA que autorice la revocatoria de la resolución RDP 014358 de abril 24 de 2018, modificada por el acto administrativo RDP 020549 de junio 05 de 2018, toda vez que POSITIVA SA, no aprobó los recursos requeridos en la solicitud del cálculo actuarial, además de otras razones. Que mediante la resolución RDP 047077 del 15 de diciembre de 2018, la UGPP modifica las resoluciones del 24 de abril y 5 de junio de 2018, en el sentido que el ISS, reconoció una pensión por incapacidad permanente de forma definitiva en favor del señor JAIME DANILO BEDOYA

FLOREZ a través de la resolución 7962 del 5 de octubre de 1973. Que la UGPP en la resolución RDP 000246 del 8 de enero de 2019 declara no cumplida la condición resolutoria contenida en el parágrafo del artículo 1º de la resolución RDP 20549 de 2018, y por lo tanto para esta entidad no es procedente el pago de la pensión de sobrevivientes, por cuanto POSITIVA S.A. negó la elaboración y envió del cálculo actuarial y traslado de la reserva.

• **PRETENSIONES:**

Son pretensiones condenatorias de los demandantes, las siguientes.

(...)

1. *Se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP- al pago INMEDIATO de la pensión de sobrevivencia Reconocida mediante Resolución No.RDP 014358 del 24 de abril de 2018 a favor de los señores DEYANIRA DEL SOCORRO MUÑOZ HIGUITA y JOHN JAIME BEDOYA MUÑOZ curador legítimo de JOAQUÍN EMILIO BEDOYA MUÑOZ con ocasión del fallecimiento del Sr. JAIME DANILO BEDOYA FLOREZ, quien se identificó con la cédula de ciudadanía número 8.303.713.*
2. *Se CONDENE a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, a reconocer y pagar la sustitución pensional por incapacidad permanente parcial de origen profesional (por accidente de trabajo); a los señores DEYANIRA DEL SOCORRO MUÑOZ HIGUITA y JOHN JAIME BEDOYA MUÑOZ curador legítimo de JOAQUÍN EMILIO BEDOYA MUÑOZ de manera retroactiva, desde la fecha del fallecimiento del señor JAIME DANILO BEDOYA FLOREZ hecho ocurrido el día 06 de septiembre de 1995, con las respectivas mesadas adicionales de cada año adeudado (junio y diciembre), en razón a que desde que solicitó la pensión, se aportó la documentación requerida y además demostrando la convivencia y la dependencia económica.*
3. *Se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- al pago de la pensión de sobrevivientes reconocida a favor de mis mandantes SIN QUE DICHO PAGO, ESTÉ SUJETO A CONDICIONAMIENTO ALGUNO, conforme el cumplimiento de requisitos establecido en la ley 100 de 1993.*
4. *Se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- a adelantar los trámites correspondientes ante POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, tendientes a que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA elabore, presente al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO para su aprobación y traslade con destino a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- la respectiva Reserva Actuarial que garantice el pago de la prestación debidamente reconocida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.*
5. *Se condene a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA a elaborar, presentar al EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO para su aprobación y trasladar con destino a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- la respectiva Reserva Actuarial que garantice*

el pago de la prestación debidamente reconocida por la UGPP a favor de mis representados.

6. *Se condene al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a que lleve a cabo el trámite para aprobar el cálculo de la Reserva Actuarial presentado por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. para ser pagado por el FOPEP y que garantice el pago de la prestación debidamente reconocida por la UGPP.*
 7. *Se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- al pago de intereses moratorios sobre las sumas que se declaren causadas a favor de mis poderdantes, a partir del día en que se causaron hasta el día en que se haga efectivo el pago de dicha prestación económica.*
 8. *Que de MANERA SUBSIDIARIA se ordene a pagar la indexación sobre las sumas de dinero reconocidas.*
- (...)

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 27 de octubre de 2020, el Juzgado Decimotercero Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a las demandadas de la totalidad de las súplicas de la demanda, al señalar que las pensiones reclamadas son incompatibles. Las costas procesales las impuso a cargo de los demandantes y en favor de las demandadas.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por los demandantes, quienes a través de su mandataria judicial la sustentaron en los siguientes términos:

(...)

En cuanto a la procedencia del reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión por incapacidad permanente de origen profesional, reconocida al causante JAIME DANILO BEDOYA FLOREZ, constituye un derecho adquirido de carácter vitalicio e irrenunciable, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, porque un derecho adquirido con la Constitución Política de Colombia en sus arts. 48 y 58 se garantizan los mismos, entendiéndose por estos, según el criterio reiterado de la Corte Constitucional que manifiesta que es aquel que ha ingresado al patrimonio propio de una persona, haciendo parte de él y constituyendo una situación jurídica concreta e inmodificable. Así lo ha considerado de antaño la referida corporación en las sentencias C 168 de 1995, en la que, para lo que interesa en este caso, sostuvo que - *La jurisprudencia colombiana también ha sido copiosa en ese sentido. Sin embargo, sólo citaremos dos de sus pronunciamientos, que en nuestro criterio, recogen el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre este asunto, el que ha sido reiterado con pequeñas variaciones no sustanciales. "La noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa (...). Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente. Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya conservación o*

integridad, está garantizada, en favor del titular del derecho, por una acción o por una excepción.” – y en sentencia del 17 de marzo de 1977, se expresó: “en conclusión, el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo en el patrimonio de su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia Constitución lo garantiza y protege. No ocurre lo mismo con la expectativa, que en general, carece de relevancia jurídica, y en consecuencia, puede ser modificada o extendida por el legislador, en esta última categoría, en donde debe ubicarse la llamada condición más beneficiosa”.

En cuanto a la pensión por incapacidad permanente, el acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964, aprobó en su momento el reglamento general del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, norma vigente para el momento en que se reconoce al señor JAIME DANILO BEDOYA FLÓREZ por parte del Instituto Colombiano de Seguros Sociales una pensión por incapacidad permanente a partir del 10 de agosto de 1971, por un valor de \$243 con 45 centavos, según el contenido de la Resolución 3667 del 20 de octubre de 1971 que obra en el expediente, provisionalmente por el término de dos años, tal como lo establecía el art. 23 del citado acuerdo. Lo anterior significa que la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional reconocida bajo la vigencia de la citada norma, se concedía por un término inicial de dos años, vencido este, y de continuar vigente la incapacidad, la prestación adquiría el carácter de definitiva, pero se concedía a la entidad la facultad de revisar la misma de estimarlo necesario, por lo cual, transcurridos los dos años y las causas que determinaron la concepción de la prestación, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales a través de la Resolución 7962 del 5 de octubre de 1973 concede al causante JAIME DANILO BEDOYA FLÓREZ en forma definitiva, la pensión por incapacidad permanente por las mismas causas de que trata la Resolución 3667 de 1971, convirtiéndose en un derecho adquirido, cierto e irrenunciable para el causante. No se demostró en el proceso que con anterioridad, esta prestación haya sido objeto de revisión y suspensión por parte de la entidad que reconoció el derecho, por lo que no hay lugar a negar la sustitución de la pensión y mucho menos a que esté sujeto a condicionamiento alguno.

En segundo lugar, en cuanto a la concurrencia o la compatibilidad en el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión por incapacidad permanente de origen profesional reconocida a la causante con la pensión de sobrevivientes de origen común, reconocida por el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, a la cónyuge e hijo del causante como beneficiarios del mismo, mediante la Resolución 09251 de septiembre 17 de 1996, y en consecuencia, resulta clara su compatibilidad, cuya causa difiere de la inicialmente reconocida. Sobre la compatibilidad ente estas dos pensiones, partimos de las siguientes premisas: 1. El Sistema de Seguridad Social Integral se conforma por tres subsistemas, entre ellos el de riesgos laborales administrados por la ARL a la que se afilia el trabajador dependiente o independiente para cubrir las contingencias derivadas de un accidente o de una enfermedad laboral, y el Sistema General de Pensiones conformado por dos regímenes excluyentes, el de Prima Media con Prestación Definida y el Ahorro Individual con Solidaridad para cubrir varias contingencias de origen común, entre ellas la invalidez, vejez y muerte. 2. Antes de que entrara en vigencia el Sistema General de Pensiones, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales cubría los riesgos de IVM, EGM y ATEP. 3. Cuando a un afiliado se le reconoció la pensión de invalidez por riesgo laboral, podía seguir cotizando para una pensión de invalidez de origen común o una pensión de vejez. Entonces atendiendo a estas consideraciones, tenemos que la pensión de sobreviviente de origen común reconocida a los demandante y la sustitución de la pensión que se reclama en este proceso, son prestaciones que amparan riesgos diferentes, dado que la primera cubre una contingencia común y la segunda protege los riesgos propios de la actividad laboral, tienen fuentes de financiación autónomas e independientes que implican una cotización separada a la seguridad social, poseen un reglamentación diferente. Justamente a partir de esta compatibilidad de pensiones se sustenta incluso la compatibilidad de la sustitución de las dos pensiones. De otro lado, hay que tener en cuenta que la UGPP había reconocido ya esta prestación mediante la resolución RTD 014358 del 24 de abril de 2018, por lo que debe darse cumplimiento a la misma, pues de no ser así, dónde quedaría el principio de legalidad de los actos administrativos.

Por último, en cuanto a la calidad de beneficiarios de los demandantes, lo cual no fue objeto de controversia para negar el reconocimiento de la prestación, sin embargo, con la prueba testimonial practicada en esta audiencia, queda acreditada

tal calidad al probarse que la demandante convivió con el causante desde la fecha en que contrajeron matrimonio, esto es septiembre de 1985, hasta la fecha del fallecimiento de este en septiembre de 1995, que nunca se llegaron a separar, que procrearon dos hijos que eran menores de edad para cuando ocurrió el deceso de su padre, que el grupo familiar dependía económicamente del causante, que la demandante se dedicaba al hogar y al cuidado de sus hijos menores de edad, además que el menor de ellos era discapacitado y presentaba una pérdida de capacidad laboral superior al 50%.
(...)

- **ALEGATOS**: Fueron presentados por los demandantes y Positiva S.A., así:

Demandantes: *“Así las cosas, las pretensiones solicitadas en este proceso estas llamadas a prosperar, además que en cabeza del causante ya había un DERECHO ADQUIRIDO de carácter vitalicio e irrenunciable, como se explicó ampliamente al sustentar el recurso de apelación, al estar disfrutando en vida el causante de una pensión de invalidez de origen laboral concedida mediante resolución No. 3667 de octubre 20 de 1971 por el ISS de manera temporal, y posteriormente a través de la resolución No. 7962 del 5 de octubre de 1973 se le reconoció en forma definitiva la pensión por incapacidad permanente de origen laboral (accidente de trabajo), pensión esta que como ya se dijo, es compatible con la de vejez o con la de invalidez de origen común. En este orden de ideas, se tiene que son compatibles las pensiones de invalidez de origen profesional (laboral) y la de vejez; y, con estas, las de sobrevivientes respecto de la pensión de vejez y de la de invalidez de origen profesional (laboral)”*

Positiva S.A.: *“El A quo negó las pretensiones por cuenta de la consideración de que el régimen vigente al momento de la estructuración de la PCL es el aplicable, por lo que concedida pensión de invalidez, al configurarse el presupuesto para la de vejez, procedía devolución de saldos. Sin embargo el ISS por favorabilidad concedió la de sobreviviente por ser mayor que la de invalidez del régimen de ATEP. Tal consideración por supuesto está apegada al marco legal vigente al causarse la primera de las pensiones, y además consideró la aplicación de la regla más benéfica para el demandante, por lo que en un todo está apegada al ordenamiento legal, acompasado del marco de derechos fundamentales, por lo que se ruega confirmar la de instancia. Si bien no fue objeto de consideración al recurrir, en aplicación del principio de eficacia y economía procesal, ruego al Tribunal considerar si sería procedente emitir orden a la UGPP, quien es parte en este proceso, de devolución del cálculo actuarial que le fuera entregado por Positiva por cuenta del expediente pensional del causante Jaime Danilo Bedoya (qepd), bajo la consideración de que al proceso se aportó certificación de traslado de cálculo actuarial correspondiente, ante*

la manifestación contenida en la sentencia apelada de que tal traslado de recursos ni tuvo causa jurídica”

- **DECRETO 806 DE 2020:** Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

CONSIDERACIONES:

Mediante resolución 3667 de 1971, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales le reconoció al señor Jaime Danilo Bedoya Flórez la pensión por incapacidad permanente provisional por dos años en cuantía de 243,⁴⁵ con ocasión de un accidente de trabajo. A través de la resolución 7962 de 1973 le fue reconocida tal prestación de origen profesional de forma definitiva.

La muerte del causante Bedoya Flórez se encuentra acreditada con el registro civil de defunción de folios 47, en el que se lee que tal hecho ocurrió el 6 de septiembre de 1995, momento para el cual contaba con 45 años de edad.

De la prueba documental que obra en el expediente, se desprende que el causante acreditó en toda su vida laboral un total de 1.285 semanas cotizadas.

A través de la resolución 09251 de 1996, el Instituto de los Seguros Sociales le concedió una pensión de sobreviviente de origen común a Deyanira del Socorro Muñoz Higueta en calidad de cónyuge y a John Jaime y Joaquín Emilio Bedoya Muñoz en calidad de hijos. Esta decisión fue modificada por la resolución 017464 de 2011, ordenando el pago de la prestación en favor de Deyanira del Socorro Muñoz Higueta y Joaquín Emilio Bedoya Muñoz, este último en calidad de hijo inválido.

Aspiran los demandantes se les reconozca, además de la pensión de sobrevivientes de origen común otorgada por el ISS, la pensión de

sobrevivientes de origen profesional con ocasión de la pensión de invalidez reconocida al causante mediante resolución 7962 de 1973.

El **problema jurídico** a resolver por esta Sala se centrará en determinar si a los demandantes les asiste derecho a percibir simultáneamente la pensión de sobrevivientes de origen común y profesional, con ocasión de la muerte del señor Jaime Danilo Bedoya Flórez.

Ahora bien, frente a la compatibilidad de prestaciones económicas de origen profesional con las de origen común, esta Sala ha venido compartiendo la postura que la misma es permitida, criterio que también asume la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, pues así lo ha señalado en sentencias SL17433 del 30 de junio de 2014, con radicado 46637, 33265 del 2010, 34820 de 2011, 41620 de 2011 y 40560 de 2013, en donde se expuso que son compatibles estas dos prestaciones debido a que con los recursos con que se pagan tienen fuentes de financiación independientes, cotizándose separadamente para cada riesgo y por poseer reglamentaciones diferentes.

Para resolver el problema jurídico, es necesario traer lo dispuesto en el artículo 53 del decreto 1295 de 1994, norma que se encontraba vigente para el momento de la muerte del causante, la cual señalaba:

“Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que deba reconocerse de conformidad con el presente decreto, se devolverán al afiliado o a sus beneficiarios:

Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del Saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional.

Si se encuentra afiliado al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.” (Negrilla fuera del texto)

Es cierto que el Decreto 1295 de 1994 fue declarado inexecutable a través de la sentencia C-452 de 2002; no obstante, la Corte Constitucional difirió los efectos de la inexecutable hasta el 17 de diciembre de 2002, con la finalidad de que el Congreso expidiera la ley correspondiente, lo cual, efectivamente

aconteció con la promulgación de la Ley 776 de 17 de diciembre de 2002. En dicha providencia, expuso la Corte que el ejecutivo no estaba facultado para regular situaciones que tienen que ver con el régimen de las prestaciones, toda vez que se excedía en sus facultades, pues, lo regulado en este artículo no forma parte de la administración del sistema sino del sistema mismo.

El Congreso de la República expidió la Ley 776 de 2002, la cual en su artículo 15 trajo consigo la misma regulación dispuesta en el artículo 53 del decreto 1295 de 1994, de la siguiente manera:

“Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que deberá, reconocerse de conformidad con la presente ley, se entregará al afiliado o a los beneficiarios:

a) Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional;

b) Si se encuentra afiliado el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. (Negrilla fuera del texto)

De acuerdo a lo anterior, quedó establecido para dicha fecha que ante el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional, al afiliado se le entregaría la respectiva indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, como lo dispone el artículo 37 de la ley 100 de 1993, pero por la sencilla razón de que no reunía los requisitos establecidos para la pensión de vejez.

En el caso de autos, el señor Jaime Danilo Bedoya Flórez obtuvo la pensión de invalidez de origen profesional en el año de 1971; no obstante, continuó realizando cotizaciones al sistema general de seguridad social hasta el día de su muerte, esto es, 6 de septiembre de 1995, fecha para la cual acreditó 45 años de edad y 1285 semanas de cotización, por lo que a todas luces no tenía un derecho consolidado a la pensión legal de vejez establecida en la ley 100 de 1993, lo que no atenta contra el artículo 58 de la Constitución Política y los derechos adquiridos de los trabajadores.

Frente a este punto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL4399-2018, con radicado 39972 del 10 de octubre de 2018, al explicar la compatibilidad pensional según lo plasmado en los artículos 53 del Decreto 1295 de 1994 y 15 de la Ley 776 de 2002, expresó:

*“... estas normas no pueden entenderse de manera aislada, sino dentro de una lectura sistemática, conjunta y armónica de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, puesto que, según los artículos 37 y 66 de esta normatividad, **la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos solamente proceden como garantías subsidiarias en caso de no haberse cumplido las exigencias legales para acceder a la pensión de vejez, bien sea en el régimen de prima media o en el de ahorro individual, puesto que, en caso de que un afiliado acredite la totalidad de requisitos, el sistema de pensiones deberá otorgar de manera imperativa la prestación correspondiente al tratarse de un derecho causado y consolidado.***

*Es así como la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva por parte del sistema de pensiones, prevista en los artículos 53 del Decreto 1295 de 1994 y 15 de la Ley 776 de 2002, para cuando el régimen de riesgos laborales otorgue las prestaciones de invalidez o de sobrevivencia, **solo es viable en los casos en que el afiliado no tenga ya causada la pensión de jubilación o de vejez en vida por no haber cumplido edad y tiempo de servicios, puesto que, en tal evento, se habría configurado un derecho adquirido en el patrimonio del titular y que, en esa medida, el sistema de seguridad social está llamado a salvaguardar**, de modo que, causada la pensión, no podría el sistema otorgar, en su lugar, los saldos existentes en la cuenta individual o la indemnización sustitutiva, pues ello sería atentar contra el mandato previsto en el artículo 58 de la Constitución Política y la teoría de los derechos adquiridos, defendida por esta Corporación en múltiples oportunidades. (Negrilla fuera del texto)*

De esta manera, se puede concluir que el señor Bedoya Flórez al no dejar causado el derecho a la pensión de vejez con anterioridad a su deceso, era posible solicitar la indemnización sustitutiva de las cotizaciones efectuadas al sistema general de pensiones y no que sus beneficiarios reclamaran la pensión de sobrevivientes de origen común. Lo que conlleva a declarar la incompatibilidad de las pensiones de sobrevivientes de origen profesional con la de origen común, tal y como lo señaló el juzgado del conocimiento.

De lo anterior se desprende que a los beneficiarios del causante se les debería reconocer la sustitución de la pensión de sobrevivientes de origen profesional y no la de origen común, pues en lugar de esta última se debió reconocer al

causante, en vida, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; sin embargo, el Instituto de los Seguros Sociales, entidad que administrativa los riesgos de vejez, invalidez y muerte de origen común y profesional para el momento de la causación del derecho, reconoció la prestación de origen común, al señalar que esta es más favorable que la de origen profesional. Puntualmente dijo la entidad en la resolución 09251 de 1996: *“Que el pensionado continuó cotizando al sistema hasta el fallecimiento y al liquidar la prestación de sobrevivientes se encontró que esta es de mayor valor a la que el asegurado venía percibiendo por el riesgo de A.T.E.P.”*

Y es que, tal y como lo señaló la a quo, mientras que la prestación de origen profesional asciende al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, la de origen común asciende para el año 2020, fecha en que se profirió la sentencia, en la suma de \$1.208.478.

Tampoco puede considerarse que en el presente caso se está en presencia de un derecho adquirido y que, como consecuencia, se debe reconocer la prestación de origen profesional, pues ello iría en contravía a lo dispuesto en la resolución 09251 de 1996, la cual, se repite, reconoció la de origen común por ser más favorable para los intereses económicos de los beneficiarios. Reconocer la prestación reclamada por esta vía judicial, conllevaría a empeorar las condiciones pensionales de los beneficiarios de la prestación económica; sin embargo, esta no es la vía para atacar dicho acto administrativo.

Tampoco es acertada la decisión de los apelantes relacionada a que la UGPP ya les había reconocido la pensión de origen profesional, pues lo cierto es que, mediante resolución 000246 de enero 8 de 2019 dicha entidad declaró no cumplida la condición resolutoria contenida en el parágrafo del artículo primero de la resolución RDP 20549 de junio 5 de 201 8, que modificó la resolución RDP 014358 del 24 de abril de 2018, resolviendo que no es procedente el pago de la pensión de sobrevivientes.

De lo anterior se desprende que a través de la resolución mencionada se negó el reconocimiento de la prestación; esta instancia judicial solo es competente para resolver lo concerniente a la compatibilidad de las pensiones y no para analizar la legalidad de un acto administrativo.

Corolario de todo lo dicho, no les asiste razón a los demandantes a percibir de manera simultánea dos pensiones de sobrevivientes con ocasión de la muerte del señor Bedoya Flórez, una de origen común y la otra de origen profesional, pues conforme a las circunstancias particulares del caso, al no haberse causado la pensión de vejez, ambas pensiones de sobrevivientes se tornan en incompatibles. Pues tales motivos, la sentencia absolutoria merece ser **CONFIRMADA**.

Frente a las alegaciones presentadas por Positiva S.A., relacionada a que se le ordene a la UGPP devolución del cálculo actuarial que le fuera entregado por cuenta del expediente pensional del causante Jaime Danilo Bedoya, tal petición no es procedente en esta instancia del proceso, pues tal asunto no fue objeto de litigio. Y es que, teniendo en cuenta que los demandantes fueron los únicos en recurrir apelación la sentencia, resulta claro que el Tribunal apenas tiene competencia para revisar los puntos de inconformidad expuestos por la mandataria judicial atendiendo a lo dispuesto en los artículos 66 y 66A del Código Procesal Trabajo y de la Seguridad Social.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito y explícito de las alegaciones presentadas por los demandantes y Positiva S.A.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir avante la apelación formulada por los demandantes, son de su cargo y en favor de las demandadas. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$908.526, que se distribuirá proporcionalmente en favor de las 3 entidades demandadas.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** la sentencia absolutoria que se revisa por vía de apelación de fecha y procedencia conocidas.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dejó dicho en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 113 del 30 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>